

Prof.ra Marzia Rosti – Università degli Studi di Milano (Italia)

**El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en Argentina:  
el caso de las Salinas Grandes-Laguna de Guayatayoc**

Ponencia para presentar al 56° Congreso Internacional de Americanistas – Salamanca 2018

Grupo de trabajo/Tipo de contribución: 12/58

The (prior) consultation of indigenous peoples in Latin America

**Texto Provisional para no publicar**

Sumario: 1.Introducción - 2. Legislación vigente - 3. Los conflictos por la tierra: la Ley 26.160 de 2006 - 4. El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado - 5. El litio: oro blanco - 6. El caso de Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc - 7. Conclusiones.

## 1. Introducción

El presente escrito, después de un sintético análisis de la normativa de origen nacional -federal y provincial- e internacional vigente en Argentina en materia de derechos indígenas a la tierra y al territorio, ilustra el caso de Salinas Grandes-Laguna de Guayatayoc, que resulta significativo tanto por la falta de consulta y de CPLI como por las formas de organización y de defensa de las comunidades afectadas por proyectos de exploración y explotación del litio otorgados por las provincias de Salta y de Jujuy a empresas extranjeras. La metodología presentada es de corte histórico-jurídico y político-económico.

## 2. Legislación vigente

Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, con una población que supera los 40 millones de personas, de las cuales 955.032 son indígenas (2,4%), que viven sobre todo en las provincias de Chubut (8,7%), Neuquén (8%), Jujuy (7,9%), Río Negro (7,2%), Salta (6,6%), Formosa (6,1%) y La Pampa (4,5%) (<http://censo2010.indec.gov.ar>).

Por lo que concierne a la legislación, la reforma constitucional de 1994<sup>1</sup> introdujo un amplio catálogo de derechos indígenas en el art. 75 inc. 17<sup>2</sup>. Como Estado federal, a nivel nacional, ya en 1985 se aprobó la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes que declaró “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades” (art. 1), precisando que “se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio

<sup>1</sup> La reforma derogó el inc. 15 del art. 65 de la Constitución de 1853/60, que atribuía al Congreso la tarea de “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

<sup>2</sup> “Corresponde al Congreso [...] reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones” (<http://www.saij.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel?#I0075>).

nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (art. 2). A las comunidades, a través de la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci), se les reconocerá la “personería jurídica”, requisito fundamental para gozar del estatus necesario para reivindicar los derechos y acceder a algunos beneficios entre los cuales la adjudicación a “título gratuito” de tierras (artt. 7 y 9) (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm>).

La Ley 23.302 creó también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) encargado de implementar las políticas indígenas en coordinación con las provincias y de mantener el ya mencionado Re.Na.Ci. instituido en 1995 y, desde 2010, también el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.No.Pi.), o sea de las organizaciones que “ostenten la representación mayoritaria de las comunidades indígenas de un mismo o de distintos pueblos indígenas a nivel provincial, regional o nacional”.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se crearon, en 2004, el Consejo de Participación Indígena y, en 2008, el Consejo de Coordinación, los cuales pero no garantizan una efectiva participación y presencia de los pueblos originarios en los programas del INAI. La administración de Macri sumó, en 2016 en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el tan discutido Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas<sup>3</sup> tanto para promover el respeto de los derechos previstos por la Constitución Nacional, el Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989 y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU (UNDRIP) de 2007 como para “impulsar la reforma de la Ley N° 23.302, adecuándola a los estándares internacionales; proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 [...] y un proyecto de reglamentación de la propiedad comunitaria indígena” (art. 3 inc. a). Hasta hoy pero no hay noticias sobre trabajos y proyectos del citado Consejo.

Dentro de la estructura federal, desde los años 80, las provincias en las que hay una población indígena significativa han elaborado una normativa constitucional y leyes sobre el tema de la propiedad indígena de carácter general o enfocadas en temáticas específicas (Carrasco 2000; Anaya 2012). Se trata de una competencia concurrente con la federal como establece la Constitución (art. 75 inc. 17) y como ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo Confederación Indígena del Neuquén c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad del 10 de diciembre de 2013<sup>4</sup>.

Finalmente, desde el año 2001 entró en vigor el citado Convenio OIT 169 (Gomiz, Salgado 2010)<sup>5</sup>, en 2007 Argentina firmó su adhesión a la citada UNDRIP y, en 2016, a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

### 3. Los conflictos por la tierra: la Ley 26.160 de 2006

Desde que en 1994 se reconocieron los derechos indígenas y, concretamente, “la preexistencia étnica y cultural [...], la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan [...] su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten” (art. 75 inc. 17), en el país los conflictos por la tierra han aumentado de manera

<sup>3</sup> Creado con el Decreto 672/2016 (B.O.12 de mayo de 2016, n. 33.377) pero sin la consulta de los pueblos indígenas y por eso rechazado a través del Parlamento de Naciones Originarias (Comité de Derechos Humanos 2016 p. 7).

<sup>4</sup> “Tanto la Nación como las provincias tienen la competencia suficiente de reglamentación en materia de derechos de los pueblos originarios en sus respectivas jurisdicciones, siempre que ello no implique por parte de los estados provinciales una contradicción o disminución de los estándares establecidos en el orden normativo federal [...] [que] se encuentran contenidos y especificados tanto en el marco constitucional sub examine y el Convenio 169 de la OIT como así también en la ley nacional de política indígena y su decreto reglamentario” (<http://www.infojus.gob.ar/jurisprudencia>).

<sup>5</sup> Ley 24.071 del 7 de abril de 1992.

significativa. Porque, por un lado, los pueblos originarios empezaron a reivindicar los derechos sobre las tierras<sup>6</sup> ancestrales de las que fueron desalojados y que a menudo han ocupado, conscientes de la existencia del texto constitucional y de los documentos internacionales ratificados por Argentina y, por otro, hay personas o empresas nacionales o extranjeras que compraron aquellas tierras hace tiempo y que defienden sus derechos basándose en el ordenamiento jurídico y en la legislación nacionales. Se trata de conflictos territoriales surgidos -digamos- como consecuencia de dos precisos momentos de la historia de las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado argentino. El primero, en la segunda mitad del siglo XIX cuando, tras las campañas militares<sup>7</sup> contra los indígenas que seguían viviendo en algunas áreas del territorio nacional, el Estado les quitó la mayoría de sus tierras para venderlas o distribuir las a inversores nacionales o extranjeros y para realizar el proyecto de desarrollo económico, social y cultural de la nación. Y el segundo momento, llamado proceso de ‘extranjerización’ de la tierra, promovido por el presidente Menem durante sus mandatos (1989-1999), cuando se vendieron a inversores extranjeros casi el 10% de las tierras en las cuales se encontraba el 90% de los recursos naturales, sin tener en cuenta que, al mismo tiempo, con la reforma constitucional de 1994, se estaban reconociendo los derechos indígenas muchas veces sobre las mismas tierras que se vendían (Rosti 2009-2010; 2016). A estos acontecimientos se han ido sumando conflictos más recientes relativos al apoyo al modelo extractivista (Giarracca, Teubal 2013), que se presenta hoy en sus formas de neoextractivismo progresista (Gudynas 2015) o desarrollista (Svampa 2016; Svampa, Viale 2014; Göbel 2015) -impulsado por el kirchnerismo<sup>8</sup> y mantenido cuando no reforzado por el macrismo<sup>9</sup>- que ha implicado e implica ahora mismo la penetración de la ‘frontera extractiva’ (agropecuaria, minera e hidrocarbúrica) con la complicidad de las mismas instituciones en áreas del país que -hasta hace poco- habían quedado excluidas, o casi, de los proyectos de explotación, porque en ese territorio se habían desarrollado otras actividades, y porque seguían presentes algunas comunidades originarias y que reivindicaban sus propiedades. Eso ha provocado un incremento de las tensiones, que a menudo han degenerado en episodios de violencia y que han terminado a veces con el desalojo de las comunidades y -casi siempre- con el ingreso de cualquier forma de empresa en el territorio, sin la consulta ni el consentimiento de las mismas comunidades indígenas.

La evolución de los conflictos territoriales ha determinado una evolución hacia sus soluciones: de una primera fase durante la cual hubo bastantes iniciativas a nivel provincial tanto para regular la posesión indígena de la tierra como para leer sentencias de los tribunales que reconocieron los derechos de las comunidades sobre las mismas, basándose en el concepto de ‘preexistencia étnica y cultural’ (Gomiz 2015; Rodríguez Duch 2015; Rosti 2016), se ha pasado a conflictos de más difícil solución, por la pasividad y la complicidad de las mismas instituciones cuyos objetivos prioritarios para el crecimiento económico del país han sido -y siguen siendo- los proyectos de las industrias extractivas (agropecuarios, mineros y petroleros), aunque estos afecten al conjunto de los derechos de los indígenas: tierras, recursos naturales, alimentación, salud, desarrollo y también consulta y CPLI.

El incremento de las reivindicaciones territoriales y de los conflictos llevó al gobierno nacional a promulgar ya en noviembre de 2006 la Ley 26.160 de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial

<sup>6</sup> Sobre todo al sur en las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut y al norte en las Provincias de Salta, Jujuy y Formosa.

<sup>7</sup> Conquista del desierto (1880) en las regiones de Patagonia y de La Pampa y Campaña del Chaco (1884) en el norte.

<sup>8</sup> Aunque el extractivismo haya proliferado en estos últimos años, cabe destacar que las bases para su consolidación remontan a la reforma estatal y del marco regulatorio promovida en los años 90 orientada a favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, gracias a beneficios y exenciones.

<sup>9</sup> Por ejemplo el Decreto 349/2016 que eliminó los impuestos sobre exportaciones mineras, sumándose a las medidas que habían reducido los aranceles a la venta de trigo, maíz, soja y los vinculados a la industria automotriz.

competente o aquellas preexistentes” (art. 1). Esta ley suspendió los desalojos de los territorios ancestrales (art. 2) y encargó al INAI de la realización, dentro de los tres años siguientes, de “relevamientos técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas” (art. 3) (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm>).

En 2007 el INAI instituyó el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) y, por falta de resultados, la Ley ha sido prorrogada ya tres veces: en 2009<sup>10</sup>, en noviembre de 2013 y luego, en noviembre de 2017 cuando ha sido prorrogada por cuatro años más hasta el 2021 con muchos temores que el gobierno de Macri no lo volviera a hacer y que se dejaran a los pueblos indígenas sin alguna defensa y tutela (Centro de Estudios Legales y Sociales n.d.). Cabe destacar que esta ley resulta ser la única medida nacional de protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, a pesar de una implementación deficitaria y de un alcance jurídico limitado. En efecto, los datos del INAI de 2016 revelan que de las 1.532 comunidades identificadas por el programa RETECI, 759 han iniciado el proceso de relevamiento (49%) y solo 459 de éstas cuentan “con resolución”, o sea que el relevamiento resulta concluido y los datos recogidos se encuentran en un Informe cartográfico y en una Carpeta técnica, junto a indicaciones prácticas para legalizar las tierras; de estos documentos pero muchas veces no se conoce el destino por la pasividad de las instituciones, mientras decenas de comunidades siguen siendo desalojadas, y se ven negadas la consulta y la información.

A esto se suma un alcance jurídico limitado de la misma Ley porque -a diferencia de los otros países de América latina- el citado RETECI constituye solo una parte del cumplimiento de las obligaciones estatales hacia los pueblos originarios, en cuanto no incluye la fase de ‘demarcación’ y de ‘titulación’ de las tierras y tampoco incluye la solución de los conflictos por la reivindicación de los territorios de los cuales fueron despojados los indígenas. Faltando las dos etapas sucesivas al relevamiento, “el territorio indígena queda expuesto a intrusiones e intromisiones por parte de funcionarios estatales o de terceros y se limitan las posibilidades de defensa de las comunidades, lesionando la preservación de las formas culturales” (Zimmerman 2015 p. 165).

Sobre el tema destaca la petición oficial de 2011 de James Anaya, entonces Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que, durante su misión a Argentina, visitó las provincias más críticas (Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa) y en su Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra expresó su preocupación por la falta de protección de los derechos de los pueblos originarios y por la política extractiva perseguida por el Gobierno y, entre sus recomendaciones, evidenció que el Estado debe elaborar un mecanismo o procedimiento de consulta de acuerdo a los estándares internacionales, para aumentar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan (Anaya 2012 p. 19, 34), posición reiterada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2017).

#### 4. El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado

Existe una relación directa entre personería jurídica, demanda territorial, consulta y CPLI, ya que el reconocimiento como pueblo indígena a través de la personería y la restitución territorial son requisitos fundamentales para ejercer el derecho a la consulta y el CPLI, dos instrumentos que hasta hoy la legislación argentina no preve tanto cuando hay que evaluar proyectos de inversión y de explotación que afectan tierras indígenas como cuando hay que aprobar proyectos de ley o reglamentación que los involucren (CERD 2017). Y esto a pesar de que la Constitución nacional ‘asegure’ a los pueblos indígenas “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a

<sup>10</sup> En octubre de 2008 el INAI declaró que solo se habían aprobado seis proyectos provinciales de relevamiento territorial y que solo dos provincias (Salta y Santiago del Estero) estaban en condiciones de recibir los fondos destinados al mencionado relevamiento ([http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012\\_083.pdf](http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_083.pdf); ENDEPA 2013).

los demás intereses que los afecten” (art. 75 inc. 17) y que Argentina haya ratificado el Convenio OIT 169 y que haya firmado su adhesión a la UNDRIP, las cuales establecen unos estándares internacionales con respecto al derecho a la consulta<sup>11</sup> y al CPLI<sup>12</sup> que ya son parte del ordenamiento jurídico argentino y que la Constitución nacional dispone que deben de ser aplicados en todas las Provincias (art. 31), que ya reiteran en sus constituciones algunos de estos derechos, y que serían nulas, de una nulidad absoluta, toda medida de carácter legislativo o administrativo susceptible de afectar -directa o indirectamente- sus derechos o la integridad como pueblos y que haya sido adoptada omitiendo el procedimiento de consulta previa<sup>13</sup>.

Se observa en cambio un reducido número de consultas que, cuando esas se producen, “es con un carácter discrecional y sin respetar los estándares internacionales” (CERD 2017 p. 4); con una práctica discrecional se elige unilateralmente cuales proyectos se realizan, a qué pueblos indígenas se consulta y con qué modalidad; es común que los estudios de impacto ambiental o los expedientes no se traduzcan a la lengua originaria del pueblo indígena afectado por los proyectos: “Habitualmente se constatan prácticas donde priman decisiones coercitivas, donde las presiones se imponen, con manipulaciones sobre los líderes indígenas, corrupción, creación de organizaciones falsas, falsificación de documentos; [...] para doblar el brazo a favor de los intereses de las grandes empresas y sus intereses patrimoniales, sin considerar los intereses vitales en juego y de desarrollo de las comunidades y los Pueblos Indígenas” (Comité de Derechos Humanos 2016 p. 6).

Al respecto destacan las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se han otorgado concesiones para la exploración y la explotación del litio sin la consulta y el CPLI de las poblaciones locales, desencadenando a veces conflictos tanto entre empresas, gobierno, comunidades indígenas y campesinos como entre las comunidades por los imaginarios que el litio genera (Argento, Zicari 2017 p. 40-2; Svampa, Viale 2014 p. 215).

## 5. El litio: oro blanco

Entre los recursos naturales el litio ha asumido en los últimos años una especial importancia por ser el componente esencial para la producción de baterías recargables Ion-Litio empleadas en dispositivos de consumo masivo, para proyectos de automóviles eléctricos y en algunos fármacos. El tema de su explotación ha tenido impacto en América latina, ya que se estima que cerca de un

<sup>11</sup> La Consulta: 1. es un deber propio de los Estados (OIT 169, art. 6.1); 2. debe realizarse a través de las instituciones representativas de los pueblos (OIT 169, art. 6.1 y UNDRIP art. 19); 3. debe realizarse de buena fe (OIT 169, art. 6.2 y UNDRIP art. 19); 4. antes de adoptar o aplicar leyes o medidas administrativas que puedan afectar directamente a las comunidades (OIT 169 art. 6.1 y UNDRIP art. 19); 5. antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (UNDRIP art. 32.2); 6. antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentran en las tierras donde habitan los pueblos indígenas (OIT 169, art. 15.2); 7. antes de utilizar las tierras o territorios indígenas para actividades militares (UNDRIP art. 30) y - finalmente- 8. que la consulta debe llevarse a cabo con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado (OIT art. 6 y UNDRIP artt. 19 y 32) (Galvis Patiño 2010 p. 11-3).

<sup>12</sup> El Estado no puede llevar a cabo acciones sin el CPLI de los pueblos afectados cuando: 1. el proyecto implique el traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales y su reubicación (OIT 169, art. 16.2); 2. se proceda al almacenamiento o la eliminación de materiales peligrosos en sus tierras y territorios (UNDRIP, art. 29); 3. se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que generen efectos como: la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y la contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, impactos sanitarios y nutricionales negativos y de larga duración, abuso y violencia. Véase también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el importante caso *Saramaka vs. Suriname* (2007).

<sup>13</sup> En los casos en los que la consulta se refiera a proyectos que no generan los impactos indicados o cuando se trate de medidas legislativas o administrativas (UNDRIP artt. 19 y 32) y no se llegue a un acuerdo o al consentimiento, por un lado, las comunidades no tienen el derecho a vetar el proyecto o la medida legislativa y, por el otro, los Estados no tienen una completa discrecionalidad, porque tienen siempre que respetar normas y principios del Estado de Derecho.

80% de las reservas mundiales se encuentran en el denominado ‘Triangulo del Litio’ que abarca la región del norte de Chile, del sur de Bolivia y del noroeste de Argentina.

Desde décadas en efecto Chile explota el litio en el Salar de Atacama como materia prima, acentuando su perfil extractivista y colocandose como el principal exportador mundial de la región (33%)<sup>14</sup>, aunque ultimamente limitó las licencias de explotación; Bolivia en cambio nacionalizó sus reservas y los grandes proyectos para explotarla y promover la producción industrial de baterías dieron hasta hoy escasos resultados faltando la inversión extranjera<sup>15</sup>. En cuanto a Argentina, los proyectos de exploración y explotación del litio han sido parte de la política de estado para impulsar la actividad minera en el ámbito del modelo productivo nacional del kirchnerismo<sup>16</sup> y hoy el país es el segundo productor del área (16%) y tiene potencialidades para llegar a ser -dentro de cinco años- el primer productor, triplicando las 30.000 toneladas producidas en 2016 gracias a un marco regulatorio muy favorable para atraer inversiones extranjeras, con respecto a Chile y sobre todo a Bolivia<sup>17</sup>. Desde hace aproximadamente dos décadas, en los varios salares de las provincias de Salta, Jujuy e Catamarca en un área de más de 300.000 hectáreas<sup>18</sup> se han otorgado concesiones para la exploración y la explotación de litio, mientras el gobierno nacional ha adoptado distintas posturas: a partir de un proyecto de ley de 2014<sup>19</sup> que lo declaraba bien estratégico y proponía la creación de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado y de la Comisión Nacional de Explotación del Litio para regular la extracción del mineral en las salinas, pero sin tomar en cuenta los derechos indígenas, se pasó a otro texto de 2015<sup>20</sup> en el cual se declaraba el litio como recurso natural estratégico y se consideraba necesaria la consulta y el CPLI de las comunidades indígenas afectadas por exploraciones y explotaciones. De momento, un tercer proyecto similar presentado en marzo de 2017 resulta pendiente, mientras el gobierno bajo el tema de ‘reinsertar a Argentina en el mundo’ ha encontrado representantes de países extranjeros y de multinacionales interesados a invertir en el recurso, transmitiendo un imaginario que lleva casi a pensarlo como una ‘guerra del litio’ entre los mismos inversores extranjeros seducidos por los gestos del Presidente.

A nivel nacional el marco jurídico en el que se desarrollan las actividades está compuesto por el art. 124 de la Constitución nacional, que reconoce a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, por el Código de Minería del 1997 y por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras del 1993 que fomentan proyectos de inversión de grandes empresas transnacionales, sin alguna referencia a los territorios y a los pueblos indígenas. El Código requiere sólo el permiso de los ‘propietarios’ del suelo para la exploración de los minerales y tampoco la más reciente Ley 25.675 General del Ambiente de 2002 hace referencia a la consulta a los pueblos indígenas: ésta última preve la obligatoriedad de un estudio de Impacto Ambiental de los proyectos, de un debido acceso a la información pública ambiental y menciona el derecho de toda persona a ser consultada, pero añade que la opinión u objeción de los participantes no será vinculante (art. 20). Si bien la minería del litio no colleva los riesgos y las destrucciones medioambientales que determina la minería a cielo abierto o las técnicas de extracción no convencional de hidrocarburos, también tiene costes medioambientales, porque se requiere una gran cantidad de agua o sea un bien raro en la zona de la puna atacameña y, en general, en todo el norte argentino, y por lo tanto compite con las actividades agrícolas y de pastorío de las comunidades indígenas locales y también podría

<sup>14</sup> Cerca de 68.000 toneladas en 2016.

<sup>15</sup> Solo 120 toneladas en 2016.

<sup>16</sup> El Plan Minero Nacional de 2004 determinó en efecto que, ya solo entre el 2003 y el 2006, los proyectos mineros creciesen del 800% y las inversiones del 490%.

<sup>17</sup> El Servicio Geológico de EEUU y el Servicio Geológico Minero argentino individuaron unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio con ya 53 proyectos de extracción; estimaron que hasta 2019 llegarán más de 700.000 USD de inversiones sólo en Jujuy y Catamarca.

<sup>18</sup> En la década de los 90 empezaron las concesiones en el salar de Hombre Muerto en Catamarca y, desde el 2010, sobre Olaroz y Caucharí (Jujuy) y Salinas Grandes (Salta y Jujuy).

<sup>19</sup> Presentado por diputados del Partido Solidario y archivado (Aranda 2015; Fornillo 2015; Ferradás Abalo, Lobo, Lucero 2016).

<sup>20</sup> Del senador Fernando Solanas, archivado en marzo 2017, y se presentó otro igual en abril 2017.

afectar el turismo desarrollado, gracias a la naturaleza y a los paisajes casi lunares de las salinas. Con las palabras de Barbara Göebel: “los espacios concesionados no son espacios vacíos; más bien la minería del litio *aterriza* en territorialidades con trayectorias históricas propias, prácticas específicas, significados culturales y dinámicas de articulación social. Los espacios concesionados se soplan con tierras de pastoreo, territorios indígenas y reservas naturales” (Göbel 2014 p. 174) y con notables diferencias con respecto al nivel de auto-organización indígena, la tenencia de títulos comunitarios de las tierras y el ejercicio del derecho a la consulta y el CPLI, generando distintas reacciones, dinámicas y resultados.

## 6. El caso de Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc

El caso resulta significativo tanto por la falta de consulta y de CPLI como por las formas de organización y de defensa de las comunidades involucradas. Salinas Grandes es un salar de 212 km<sup>2</sup> situado en la Puna argentina y que integra la subcuenca de la laguna de Guayatayoc; es una región compartida entre las provincias de Jujuy y de Salta<sup>21</sup>, donde viven unas comunidades kollas y atacamas que practican agricultura y ganadería de subsistencia y se dedican a la cría de la sal, organizadas en cooperativas salineras o como simple asalariados, con un manejo racional del recurso. A principios de 2010 en las salmueras subterráneas que dan vida al salar se descubrió el litio y, desde entonces, en la zona -apelándose a la noción de ‘desarrollo’- se dió inicio a un proceso acelerado de exploración por parte de las empresas multinacionales impulsado por los gobiernos nacionales, de Salta y de Jujuy, proceso que desencadenó un conflicto con las comunidades que habitan ancestralmente el territorio y que subsisten gracias a la producción artesanal de la sal.

En el mismo 2010, la provincia de Salta<sup>22</sup> declaró de “interés público” el proyecto de la privada Bolera Minera S.A. para explorar, explotar e industrializar el litio en minas del departamento de La Poma<sup>23</sup> (en concreto siete minas del Salar Salinas Grandes); el gobierno de Jujuy<sup>24</sup> declaró el litio como “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico” de la provincia<sup>25</sup>, expresión que le permitiera asumir una postura más intervencionista para convertirse en socio empresarial de proyectos mineros, a diferencia del estado salteño que emerge como facilitador de la inversión privada. Notese que estas medidas legislativas fueron aprobadas sin algún tipo de consulta a las comunidades afectadas y que tampoco fueron considerados los informes de impacto ambiental realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Solá 2016 p. 223). Igualmente pasó con las concesiones a las empresas, que resultan –de momento– ser dos y empeñadas en la fase de exploración: la australiana Orocobre y la canadiense Daijin Resources Corp.<sup>26</sup> asociadas, respectivamente, con Toyota y Mitsubishi. A estas pero se suman otras demandas pendientes, por ejemplo la de Bolera Minera, ADY Resources y REMSA.

<sup>21</sup> Respectivamente, Departamento Rinconada y Departamento La Poma.

<sup>22</sup> En Salta la población indígena asciende al 6,6% de la población provincial; la Constitución reformada en 1998 se alinea a la Constitución Nacional en cuanto a los derechos indígenas y el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta resulta encargado de la adjudicación de tierras indígenas y de la gestión de los recursos naturales allí presentes. En lo relativo al medio ambiente, la Ley 7.070 del 2000 se alinea a la citada Ley nacional.

<sup>23</sup> Decreto n. 3860/10; ya en 2008 Salta había creado la empresa Recursos Energéticos y Mineros Salta para garantizar infraestructuras que incentivasen la inversión privada.

<sup>24</sup> En Jujuy la población indígena asciende al 7,9% de la población provincial, queda aún vigente la Constitución de 1986; la Ley 5.231 de 2000 preve que se otorguen los títulos de propiedad comunitaria de aquellas tierra tradicionalmente ocupadas por las comunidades según la Constitución Nacional, el Convenio OIT 169 y la Ley 23.302. En relación al medio ambiente se alinea con la citada Ley nacional con la necesidad de evaluar el impacto ambiental y de garantizar el acceso a la información pública ambiental (Ley provincial 5.063).

<sup>25</sup> Decreto-Acuerdo n. 7592; en 2011 creó la Empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el Comité de Expertos para analizar los proyectos de litio, pero sin consultar a las comunidades.

<sup>26</sup> En abril 2016 Jujuy entregó 90 mil ha de las Salinas Grandes a Daijin Resource sin consulta de las 33 comunidades originarias y generando una fuerte reacción.

En un primer momento, sin reconocerse el derecho a la consulta, las empresas consiguieron que unos integrantes de las comunidades firmasen contratos para la cesión de los derechos sobre el territorio en cambio de un canon individual de 25.000 pesos y que se presentaron como evidencias de una supuesta aceptación comunitaria<sup>27</sup>. Rápida llegó la reacción: por una parte, unos integrantes de la Cooperativa de Santuario Tres Pozos consiguieron anular los contratos (Puente y Argento 2015, p. 132) y, por otra parte, desde mayo de 2010, 33 comunidades afectadas por los proyectos y las concesiones empezaron a reunirse mensualmente en una organización supra-comunitaria denominada Mesa de las Comunidades y Pueblos Originarios de la Cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc para la defensa y gestión del Territorio, que definió la estrategia de defensa abarcando diferentes ámbitos (Solá 2016). Se precisa que estas comunidades poseen personería jurídica<sup>28</sup>, pero aún no han conseguido los títulos de propiedad del territorio porque, cuando se efectuó el relevamiento territorial, surgió el obstáculo que los límites territoriales de las distintas familias y entre las comunidades se conforman de manera colectiva y oral a través de las generaciones, y no mediante titulaciones escritas, o sea “cada uno sabe hasta donde llega su territorio” (Puente, Argento 2015, p. 128).

Con respecto a lo jurídico, ya en noviembre 2010 se presentó una acción de amparo ante la CSJN, exigiendo la consulta previa sobre la concesión de Salinas Grandes en el respecto a la Constitución nacional (art. 75 inc. 17), de la Ley general del Ambiente n. 25.675 del 2002<sup>29</sup>, del Convenio OIT 169 y de la UNDRIP (CSJN 2011). En apoyo, en 2011, las comunidades recibieron un *amicus curiae* de varias organizaciones de la sociedad civil empeñadas en la defensa de los derechos humanos y comprometidos con la causa ambientalista (SERPAJ Argentina, AADI y FARN).

El 28 de marzo de 2012 la CSJN convocó en una audiencia pública a los dirigentes indígenas de las comunidades<sup>30</sup> y a los representantes del gobierno de la provincia de Jujuy<sup>31</sup> (Schiaffini 2013) y, en enero de 2013, declaró su incompetencia y remitió la causa a los juzgados provinciales<sup>32</sup>, lo que implicaría –como ha sido observado– una división de la causa y del territorio entre las dos provincias y por lo tanto una denegación de acceso a la justicia en instancia adecuada. Frente a este

<sup>27</sup> Es lo que ocurrió en el caso del Salar de Olaró-Cauchari (Departamento de Susques, Provincia de Jujuy): entre 2000 y 2001 las comunidades de los salares fueron reconocidas legalmente; entre 2003 y 2008 la provincia de Jujuy les entregó títulos de tierras comunitarias y, en 2007, se creó la Asociación Pueblo Atacama con nexos transprovinciales y transnacionales. Cuando en 2009 llegaron, las empresas mineras promovieron una estrategia de intervención local para cubrir el vacío histórico de ausencia del Estado en esta región periférica con medidas de ayuda concreta (financiaron rituales y torneos de fútbol, donaron ropa y materiales escolares, ofrecieron transportes gratuitos) con las que se ganaron la confianza de muchos habitantes y crearon redes clientelares sobre todo con los jóvenes y obtuvieron -entre 2011 y 2013- que las asambleas indígenas aprobasen los proyectos de exploración y explotación del litio en cambio de una compensación anual muy baja y, por ejemplo, la oferta de un trabajo en las empresas mineras, pero sin un proceso participativo con suficiente información y debates. La ausencia del Estado como garante de los derechos indígenas favoreció la imposición de la lógica de negociación empresarial y el cominezo de los proyectos mineros (Göbel 2013, 2014). Hoy se avanza en la construcción de tres pozos con una inversión estimada de 425 millones USD con capitales de China, Japón y Canadá.

<sup>28</sup> Hay otras comunidades afectadas pero sin personería jurídica, por eso no pudieron incorporarse a la Mesa (Puente, Argento 2015, pp. 132-33).

<sup>29</sup> Art. 4: “[...] Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

<sup>30</sup> Se convocaron la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos y a las restantes comunidades demandantes de Salinas Grandes en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya (Jujuy) y La Poma y Cobres (Salta).

<sup>31</sup> Salta no fue convocada porque la CSJN consideró que en su territorio no había pedimentos concedidos, aceptando la posición de la provincia; Jujuy desestimó la demanda alegando que no existía trámite alguno para explorar o explotar litio y que la exploración del salar Olaroz contaba con el consentimiento de los habitantes y se citó a Rosana Calpanchay presidenta de la comunidad de Puesto Sey, quien había firmado los contratos de las empresas para demostrar que con esta firma se hubiera logrado el consentimiento de las comunidades.

<sup>32</sup> “La inadmisibilidad de la solicitud se deriva de la carencia del mínimo de apoyatura fáctica y probatoria que exige una actuación de las características de la requerida [...] por ello, se resuelve: I. Rechazar la acción de amparo interpuesta contra la Provincia de Jujuy. II. Declarar que las acciones entabladas contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional son ajenas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (CSJN 2012).



fallo, el 26 de junio de 2013 las comunidades acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, hasta ahora, el caso está en proceso de admisión<sup>33</sup>. Ya sabemos que, si se comprobare la violación del derecho, el caso pasaría a la Corte para que falle a favor o en contra del Estado argentino.

Paralelamente a la acción ante la justicia nacional, se llamó la atención a nivel internacional presentando en el 2011 el caso a la Relatoría de Derechos Indígenas de la ONU y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. El Relator Anaya durante su visita oficial en diciembre del mismo año encontró a la comunidad Ojo de Huáncar y en su Informe al Consejo de Derechos Humanos citó propio el caso Salinas Grandes (Anaya 2012 puntos 38 y 42); el CDESC por su parte manifestó la preocupación por “la persistencia” en numerosas provincias de amenazas, desplazamientos y desalojos violentos de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales; lamentó además las deficiencias en los procesos de consulta de las comunidades indígenas afectadas que han permitido la explotación de los recursos naturales en los territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por esas comunidades en violación de la Constitución y del Convenio OIT 169. Manifestó su preocupación por “las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes [...] por el medio ambiente, el acceso al agua, la forma de vida y la subsistencia de las comunidades indígenas (arts. 1, 11 y 12)” y recomendó al Estado parte que adoptara “las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas [...] que siempre celebre consultas efectivas [...] antes de otorgar concesiones a empresas de propiedad estatal o a terceros, para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados o utilizados por ellas, y a que cumpla con la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de quienes se vean afectados por esas actividades económicas. [...] que garantice que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto y que se conceda a las comunidades indígenas una indemnización justa y equitativa”. Exhorta “a que brinde protección a las comunidades indígenas durante la ejecución de los proyectos de exploración y explotación minera” y que estas medidas se apliquen también al caso de Salinas Grandes (CDESC 2011 p. 2-3).

Además, se combinaron acciones directas como, por ejemplo, el corte de la ruta nacional 52 y varias marchas hasta las capitales provinciales y campamentos que tuvieron un empate mediático y territorial tanto que las actividades exploratorias en Salinas Grandes se frenaron, logrando una suerte de medida cautelar ‘de hecho’.

Finalmente, entre 2014 y 2015 se redactó el documento *Kachi Yupi-Huellas de Sal. Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc*, aprobado en agosto 2015 por las 33 comunidades reunidas en Asamblea general, en cuanto resguarda su cultura ancestral y representa el modelo preciso del proceso de consulta y de CPLI, y reconocido por el Defensor del Pueblo de la Nación con la Resolución n. 25/16 en mayo 2016 que ha exhortado a distintas autoridades nacionales y provinciales de Salta y Jujuy a respetarlo (<http://www.dpn.gob.ar>). Dicha resolución representaría -el condicional es obligado- un paso ‘importante e único’, porque legitima los derechos de consulta previa y de CPLI cada vez que pretenda adoptarse una medida administrativa o legislativa que pueda afectar a una o varias comunidades de la cuenca, se formulen o implementen planes o programas de desarrollo y/o se autorice la prospección o explotación de recursos existentes en dichos territorios (Solá 2016).

## 7. Conclusiones

---

<sup>33</sup> Defensor del Pueblo de Nación, Resolución n.00025/16, act. n.5147/13, Acta de aprobación de Kachi Yuoi - Huellas de la Sal / Procedimiento de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado para las Comunidades Indígenas de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Quera y Agua Calientes, 22.08.2015.

A pesar de que no se pueda negar el inmenso potencial económico que la explotación del litio presenta, el caso de Salinas Grandes es significativo porque, en primer lugar, se ubica dentro de un importante debate entre el crecimiento económico y la posibilidad de un desarrollo sustentable, respetando los derechos indígenas reconocidos tanto por Pactos y Convenios internacionales como por los ordenamientos jurídicos nacional y provinciales. Además, pone de manifiesto la falta de implementación del derecho a la consulta y del CPLI de los pueblos indígenas con respecto a la explotación de los recursos naturales presentes en sus territorios. Se subraya también el hecho de que no se hayan fomentado políticas que favorecen la explotación por parte de las mismas comunidades, así como la falta de aprobación de disposiciones legislativas que regulen la explotación por parte de terceros, las cuales hubieran permitido proteger el medio ambiente y las comunidades que acaban viviendo en un clima de inseguridad jurídica generalizada (Anaya 2012). Unas herramientas útiles para cerrar la “brecha de implementación” (Stavenhagen 2006) de estos derechos podría ser el citado Consejo Consultivo Participativo y, en el caso concreto de Salinas Grandes, la reciente Mesa del Litio compuesta por representantes de las tres provincias involucradas, la cual tendría que elaborar un “un protocolo de buenas prácticas en la explotación de este producto” y que esperamos que tome en consideración también la voluntad de las comunidades afectadas.

## Bibliografía

- Anaya, J. (2012). *La situación de los pueblos indígenas en Argentina, Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA.
- Aranda, D. (2015). YPF del litio: la minería progresista. En *Comunicación Ambiental*, <http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html>, 25 de julio.
- Argento, M., Zicari, J. (2017). Las disputas por el litio en la Argentina: materia prima, recurso estratégico o bien común? *Prácticas de Oficios*, 19, 7-49.
- Carrasco, M. (2000). *Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina*. Buenos Aires: IWGIA-Vinciguerra.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (n.d.). *Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160*, <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/09/Pr%C3%B3rroga-Emergencia-Territorial.pdf>.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-CDESC (2011). *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto*. 14 de diciembre.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial-CERD (2017). *Observaciones finales sobre los Informes periódicos 21° a 23° combinados de la Argentina*. 11 de enero.
- Comité de Derechos Humanos (2016). *Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos en Argentina en el marco de la presentación del Quinto Informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos 117° Periodo de sesiones, Derechos de los pueblos indígenas en Argentina*, [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ARG/INT\\_CCPR\\_CSS\\_ARG\\_24354\\_S.pdf](http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ARG/INT_CCPR_CSS_ARG_24354_S.pdf).
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (2011). Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo, C.1196.XLVI, 27 de diciembre.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012). Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo. Buenos Aires, 18 de diciembre.
- Equipo Nacional de Pastoral Indígena-ENDEPA (2013). *Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160. La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas*.
- Ferradás Abalo, E., Lobo, A.L., Lucero, J. (2016). *Conflicto socioambiental en Salinas Grandes: neoextractivismo, resistencias y nociones de desarrollo en el nuevo escenario político regional*. Villa María: Universidad Nacional de Villa María.

- Fornillo, B. (2015) (Coord.). *Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo-Clacso.
- Galvis Patiño, M. C. (2010). Consulta, consentimiento y veto. *AportesDPLF-Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal*, 14, 11-3.
- Giarracca, N., Teubal, M. (2013) (eds.). *Actividades extractivas en expansión: reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- Göbel, B. (2013). La minería del litio en la Puna de Atacama: interdependencias transregionales y disputas locales. *Iberoamericana*, 49, 135-149.
- Göbel, B. (2014). La minería del litio en Atacama: disputas sociales alrededor de un nuevo mineral estratégico. En Göbel B., Ulloa A. (Eds.). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*, (pp. 167-193). Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Göbel, B. (2015). Extractivismo y desigualdades sociales. *Iberoamericana*, 58, 161-165.
- Gomiz M. M. (2015). El derecho constitucional de propiedad comunitaria indígena en la jurisprudencia argentina. En Kosovsky F., Ivanoff S. L. (Comp.). *Dossier propiedad comunitaria indígena* (pp. 119-138). Comodoro Rivadavia: EDUPA.
- Gomiz, M. M., Salgado J. M. (2° ed. 2010). *Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas. Su aplicación en el derecho interno argentino*. Neuquén: ODHPI-IWGIA.
- Gudynas, E. (2015). *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Cochabamba: CEDIB.
- Puente, F., Argento, M. (2015). Conflictos territoriales y construcción identitaria en los salares del noroeste argentino. En Fornillo, B. (Coord.). *Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina*, (pp. 123-166). Buenos Aires: Editorial El Colectivo-Clacso.
- Rosti, M. (2009-2010). La terra contesa fra diritto e cultura: Compagnia de Tierras del Sur Argentino versus Curiñanco-Rúa Nauhelquir. *THULE. Rivista italiana di studi americanistici. Monografica I diritti delle popolazioni indigene e il diritto indigeno nelle Americhe*. 26/27-28/29, 477-99.
- Rosti, M. (2016). El 'modelo extractivista' y los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio en la Argentina de hoy. *DPCE online*, 4, 49-73.
- Rodríguez Duch, D., (2015). Apuntes sobre Propiedad comunitaria indígena. En Kosovsky F., Ivanoff S. L. (Comp.). *Dossier propiedad comunitaria indígena* (pp. 38-57). Comodoro Rivadavia: EDUPA.
- Schiaffini, H. (2013). Litio, llamas y sal en la Puna argentina Pueblos originarios y expropiación en torno al control territorial de Salinas Grandes. *Entramados y perspectivas*, 3, 121-36.
- Solá, R. (2016). Kachi Yupi: un ejercicio de autodeterminación indígena en Salinas Grandes. En FARN, *Informe ambiental anual*, 215-237.
- Stavenhagen, R. (2006). *Las cuestiones indígenas. Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas*. 16 de febrero.
- Svampa M. (2016). *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*. Buenos Aires: Edhasa.
- Svampa M., Viale E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Zimmerman S. (2015). Aportes para una norma que garantice el derecho a la tierra y al territorio indígena. En Kosovsky F., Ivanoff S. L. (Comp.). *Dossier propiedad comunitaria indígena* (pp. 157-174). Comodoro Rivadavia: EDUPA.